En Logroño, a 19 de diciembre de 2006, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert y P.-Caballero, de los Consejeros D. Antonio Fanlo Loras, D. Pedro de Pablo Contreras, D^a M^a del Bueyo Díez Jalón, y D. José M^a Cid Monreal, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y siendo ponente D^a. M^a del Bueyo Díez Jalón, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

93/06

Correspondiente a la consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja en relación con el expediente de revisión de oficio *de actos en materia de Seguridad Social a instancia de D^a. María Teresa C.D., relativo al diagnóstico y tratamiento de una hernia discal.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El 7 de julio de 2006, tiene entrada en el registro general de la Delegación del Gobierno en La Rioja una petición de revisión de oficio dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, suscrita por la interesada, D^a. María Teresa C.D. En la misma, tras la exposición ordenada de una serie de hechos acaecidos desde el año 2001 hasta la actualidad en relación con sus dolencias como paciente de una hernia discal, viene a solicitar a la Administración autonómica la revisión de dos actos administrativos, al amparo del artículo 102 de la Ley 30/1992, por considerarlos incursos en un vicio de nulidad del artículo 62.1 letra a) del mismo texto legal. En concreto en su suplico literalmente expresa que:

"Solicito al Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de la Rioja que, en mérito de lo consignado en el cuerpo de este escrito, documentos y copias que acompaño, se sirva admitirlo al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y previo dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, se declare la nulidad de pleno derecho, de la Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Subdirectora Provincial de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, así como la Resolución de la Gerente del Servicio Riojano de Salud de 6 de septiembre de 2002, por cuanto lesiona mi derecho fundamental de igualdad ante la Ley previsto en el artículo 14 de la CE (ex artículo 62.1. a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), debiendo dictarse una nueva

Resolución por el órgano competente por la que, estimando nuestra petición de reintegro de los gastos médicos desembolsados como consecuencia de la operación practicada, se acuerde el abono de las cantidades descritas en el Antecedente Cuarto de este escrito".

Segundo

A esta petición inicial se adjunta una extensa prueba documental, que es preciso relacionar para conocer mejor el fondo del expediente:

-Documentos 1 a 8: Expresivos de su expediente clínico, desde el mes de junio de 2001, en que le diagnostican por el Servicio de Reumatología del Hospital *San Millán* una hernia discal D6/D7, con invasión del canal espinal. En el expediente clínico se advierte que, el Hospital *San Millán*, derivó a la paciente al Hospital Clínico Universitario *Lozano Blesa* de Zaragoza, donde fue examinada el 9 de octubre de 2001, por el Dr. C., que desechaba la cirugía directa y aconsejaba el tratamiento endoscópico por vía transtorácica. Y expresaba que, "*en la actualidad, la persona con más experiencia es el Dr. R.F., íntimamente ligado a este Hospital*".

-Documento 9: Solicitud del esposo de la paciente, el Sr. P. P. ante el INSALUD de La Rioja, fechada en enero de 2002, por la que se insta a que se realice la intervención quirúrgica aconsejada por el Dr. C.

-Documento 10: Resolución de la Subdirectora Provincial de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, de febrero de 2002, por la que se deniega dicha solicitud, afirmando que ya se encontraba la paciente incluida en lista de espera para intervención por el Servicio de Neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

-Documento 11: Artículo publicado en una revista científica alemana, aportada por el Sr. P., sobre la forma de proceder en estos casos por los cirujanos de dicho país.

-Documentos 12 a 20: Justificación de los gastos ocasionados tras la práctica de la intervención quirúrgica en la Clínica Quirón de Zaragoza, que ascienden a 17.303,61€; que son los que posteriormente se van a exigir como reintegro de gastos médicos.

-Documento 21: Resolución de 6 de septiembre de 2002, dictada por la Gerente del Servicio Riojano de Salud, por la que se desestima la petición de reintegro de gastos médicos, dejando abierta la posibilidad de presentar demanda ante los Juzgados de lo Social de La Rioja.

-Documento 22: Noticia de octubre de 2005, del Diario *La Rioja* en la que se informa que el Dr. alemán Daniel R. opera en Zaragoza a una paciente riojana afectada de hernia discal, y cuyos gastos fueron sufragados por la Consejería.

-Documento 23: respuesta a un e-mail por parte del Jefe de Gabinete de la Consejería analizando los términos de comparación entre uno y otro caso, considerando que no existe un tratamiento discriminatorio.

Tercero

Por Acuerdo de 19 de julio de 2006, la Jefe del Servicio de Prestaciones y Atención al Ciudadano, tras la calificación de la solicitud registrada como de revisión de oficio, decide unir a este expediente los antecedentes e historial clínico de la Sra. C.D.

En especial consta una certificación del Hospital Clínico Universitario *Lozano Blesa* de Zaragoza, en la que se informaba que la paciente fue incluida en su "*lista de espera para ser intervenida de hernia torácica por vía posterior*". Del mismo modo consta unido a su historial un oficio de la Dirección Territorial del INSALUD de Madrid, en la que se afirma que:

"En relación con el escrito de 17 de enero procedente de la Subdirección General de Atención Especializada del INSALUD en el que se nos solicitaba información sobre los Centros en los que pudiera realizarse la técnica indicada en el caso de la paciente perteneciente a esa Dirección Territorial, D^a. Teresa C.D., cirugía endoscópica de hernia de disco torácica, les comunicamos que no tenemos constancia de que esta técnica se esté realizando en Centros dependientes de nuestro ámbito".

Cuarto

Se une al expediente de revisión de oficio, el historial clínico de la paciente, con el que la Sra. C.D. establece el término de comparación, en virtud del cual afirma la existencia de un tratamiento discriminatorio, pues, a su juicio, ante idéntica situación, las soluciones han sido diversas, ya que a ella no le han satisfecho los gastos ocasionados por la operación realizada en la Clínica privada *Quirón* de Zaragoza.

Del historial clínico de D^a. Raquel S.F. se han de relatar los siguientes hechos:

-El 15 de marzo de 2005, el Jefe de Neurocirugía del Hospital *San Millán* solicita la asistencia del Hospital Clínico de Zaragoza por "*hernia discal dorsal*".

-El 21 de marzo de 2005, la Jefe de Servicio de Prestaciones autoriza la petición de asistencia para valoración quirúrgica al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

-El 16 de mayo de 2005, el Dr. C., Catedrático Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario del Servicio Aragonés de Salud, informa sobre la intervención a practicar a la paciente, Sra. Saenz Fernández, aconsejando la técnica del Dr. alemánR..

-El Dr.R., compartiendo el diagnóstico realizado por el Dr. C., le responde enviándole un presupuesto de sus honorarios por intervención, que serían aproximadamente de 25.000 €.

-El 23 de mayo de 2005, la Subdirectora General de Ordenación, Prestaciones y Autorización de Centros, ante el presupuesto de intervención fijado por el Dr.R., solicita información al Hospital Clínico de Zaragoza, sobre si dicha técnica operatoria u otras alternativas pueden ser practicadas en un Centro público

del Servicio Sanitario Regional o del Sistema Nacional de Salud, para en su caso, derivar a la paciente.

-El 3 de junio de 2005, el Gerente del Servicio Aragonés de Salud da respuesta al oficio anterior e informa que:

"A la paciente se le informó –como resulta preceptivo- de las opciones propias del caso: alto riesgo de complicaciones neurológicas con la técnica que se emplea en nuestro país, versus alternativa quirúrgica con técnicas endoscópicas que comportan un menor riesgo (la indicación de que esta técnica alternativa la realiza el Dr.R. y la posibilidad bien intencionada de realizar la intervención en nuestro Hospital, se sugería como conocimiento y valoración de quien tenga capacidad de adoptar la decisión). Por último, confirmar que, naturalmente, no existe ningún inconveniente en realizar la intervención en nuestro Hospital si la paciente, una vez recibida y valorada por ella toda la información, opta por la intervención quirúrgica con las técnicas actualmente existentes en la cartera de servicios del mismo".

-Ante dicha información, el 13 de junio de 2005, la Jefe de Servicio de Prestaciones y Atención al Usuario le comunica a la Sra. S.F. que queda desestimada su petición para practicar la operación por el Dr.R. en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, si bien le indica que no existe inconveniente en realizar la intervención en dicho Centro hospitalario, pero con las técnicas existentes en la cartera de servicios.

-El 20 de junio de 2005, el esposo de la Sra. S.F. solicita que le remitan el informe emitido por el Gerente del Servicio de Salud aragonés del Hospital Clínico Universitario *Lozano Blesa* de Zaragoza.

-El 23 de junio de 2005, se le da traslado de la información requerida y, además, se explicita que, con fecha de 22 de junio, se ha procedido a solicitar por fax la asistencia sanitaria de su esposa, al Servicio de Neurocirugía del Hospital de Navarra.

-Con fecha de 28 de junio, se le comunica a la paciente que está citada en el Hospital de Navarra, Servicio de Neurocirugía, para el día 28 de julio de 2005.

-El 26 de julio de 2005, se autoriza el abono de los honorarios ocasionados por la intervención quirúrgica practicada por el Dr.R., con cargo al presupuesto del Servicio Riojano de Salud, previa emisión de factura por importe de 24.000€ .

-El 1 de diciembre de 2005, el Director Adjunto del Área II autoriza la solución quirúrgica practicada y, en consecuencia, la facturación de dicho servicio, así como el abono de los honorarios.

Quinto

Dentro de la instrucción del expediente de revisión de oficio instado por la Sra. C., el Jefe de Servicio de Asesoramiento y Normativa dirige una comunicación interna al Director de Recursos Económicos del Área de Salud II de La Rioja para que le informe sobre, si se abonaron los gastos ocasionados con ocasión de la intervención realizada a D^a Raquel S.F. y, en caso afirmativo, que se remita copia del expediente tramitado con motivo de dicho abono.

El 24 de julio de 2006, el Director de Recursos envía el expediente que en su día se realizó para sufragar los honorarios del Dr.R..

Sexto

El 7 de noviembre de 2006, el Instructor emite una propuesta de resolución desfavorable a la estimación de la revisión de oficio interesada por la Sra. C.D., por entender que no existe un tratamiento discriminatorio y que, por consiguiente, no concurre el motivo de nulidad de pleno Derecho del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, invocado.

Séptimo

El 8 de noviembre de 2006, se consulta a los Servicios Jurídicos de la Comunidad, y, con fecha de 21 de noviembre, la Letrada adscrita a la Consejería de Salud emite un informe favorable a la propuesta de resolución que ahora se eleva, junto con el expediente administrativo, este Consejo Consultivo.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 27 de noviembre de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 5 de diciembre del mismo año, el Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja remite al Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2006, registrado de salida al día siguiente, el Sr. Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar recibo de la consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Designada Ponente la Consejera señalado en el encabezamiento, el asunto quedó incluido en el orden del día de la sesión allí expresada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo

El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos de revisión de los actos administrativos resulta con toda claridad de lo dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor *"las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1"*. Reiteran la necesidad del dictamen del Consejo Consultivo en estos casos nuestra Ley reguladora [artículo 11.f)] y el Reglamento que la desarrolla [artículo 12.2.f)].

Por lo demás, como claramente se infiere del art. 102.1 LRJPAC, el dictamen del Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo, habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que sólo puede declarar la nulidad del acto si dicho dictamen hubiere sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad denunciada.

Segundo

Sobre la revisión de oficio de actuaciones en materia de Seguridad Social.

El Título VII de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula la revisión de los actos en vía administrativa, bien por revisión de oficio, bien por impugnación del mismo. Este Título, tras la profunda modificación llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ha abierto la posibilidad de entablar la acción de nulidad por petición de los particulares, reservándose la Administración la potestad de la inadmisión a trámite cuando no concurra ninguna de las causas de nulidad de pleno Derecho relacionadas en el artículo 62 del mismo Texto Legal.

La Ley entiende por revisión de oficio las actuaciones dirigidas a lograr, bien a instancia de parte o bien, a iniciativa de la propia Administración, la modificación del acto administrativo; y, por impugnación del mismo, la que se caracteriza por haber sido promovida por el administrado mediante los oportunos recursos administrativos.

En el supuesto que dictaminamos se trata, *prima facie*, de determinar el régimen jurídico aplicable a la revisión de oficio de los actos administrativos dictados en materia de Seguridad Social, como lo son los que ahora nos ocupan, dos Resoluciones denegatorias del reintegro de gastos médicos, que, tras ser consentidas por no haber sido impugnadas ante la Jurisdicción competente, la Social (artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril); ahora pretenden ser revisadas a instancia de parte, trayendo a colación la imprescriptibilidad de la acción de nulidad *ex* artículo 102 de la Ley 30/1992.

La Disposición Adicional Sexta de la referida Ley 30/1992 nos remite a la legislación específica sobre la materia, por lo que, en principio, hemos de estar a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994 (en adelante, LGSS)

La LPL, a su vez, dispone en su artículo 145.1 que *«Las entidades gestoras o los servicios comunes no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido»*. El apartado siguiente especifica los supuestos que quedan exceptuados de este régimen de revisión de oficio de actos administrativos.

Si bien este régimen especial es de aplicación a los actos administrativos dictados en materia de Seguridad Social favorables a los beneficiarios y anulables, supone que, para ellos, queda excepcionada la declaración de lesividad y su ulterior impugnación ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, esto es, no es de aplicación el artículo 103 de la Ley 30/1992. Lo cual conlleva la afirmación de que los actos anulables y favorables han de ajustarse en su revisión al artículo 145 LPL; sin que ello suponga que dado que, no existe precepto especial sobre la acción de nulidad, no podamos, acudir a la revisión de oficio del artículo 102 de la Ley 30/1992.

En este sentido, hemos de afirmar que la normativa propia del procedimiento laboral se refiere sólo a la revisión de actos favorables o declarativos de derechos (artículo 145 LPL), por lo que debe entenderse que, en principio, esta especialidad no alcanza a la revisión de actos desfavorables o de gravamen, restrictivos de derechos, que, en defecto de normas especiales, deben regirse, por tratarse la acción de nulidad de una institución propia del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por las normas de la Ley 30/1992.

A diferencia de la Disposición Adicional Quinta de la LRJ-PAC, que prevé la aplicación supletoria de su cuerpo normativo de defecto de disposición tributaria especial, la Adicional Sexta, en lo tocante a los actos de Seguridad Social y Desempleo, no declara expresamente el valor supletorio de la citada Ley 30/1992 respecto de las normas propias del procedimiento

laboral. Este silencio tiene su razón de ser y se explica porque la citada D.A. Sexta, se remite a una norma rituarial o procesal, la LPL; por lo que no sería técnicamente correcto atribuir a la LRJ-PAC el carácter de norma supletoria de otra llamada a regular la actuación, no de las Administraciones Públicas, sino la tramitación procesal de los órganos jurisdiccionales de lo Social. Ello no obstante, la LPL también contiene normas sobre procedimiento administrativo, normas sobre el régimen jurídico de algunas Administraciones Públicas – Entidades Gestoras y Servicios Comunes -, y, respecto de éstas últimas, sí que cabe afirmar, aunque no esté expresamente declarado en la D.A. 6ª, la Ley 30/1992, su carácter supletorio, dado que, en relación con el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley 30/1992 se erige como una norma general y común (artículo 1).

Por ello, y sin más predicamentos, consideramos que las Resoluciones cuya revisión se instan por la interesada – la de la Subdirectora Provincial de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja de febrero de 2002 y la de 6 de septiembre de 2002, dictada por la Gerente del Servicio Riojano de Salud-, pese a su firmeza, son susceptibles de ser enjuiciadas administrativamente a través de la acción de nulidad ex artículo 102 de la Ley 30/1992.

Tercero

Sobre la causa de nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992: inexistencia de discriminación.

Analizada la pertinencia de la acción de nulidad y su tramitación por los cauces previstos en el artículo 102 de la Ley 30/1992, hemos de pasar al estudio de si existe o no una causa de nulidad de pleno Derecho ex artículo 62.1º del mismo Texto Legal, a cuyo tenor: "*Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno Derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional*".

En virtud de este precepto, la Sra. C.D. considera que las dos Resoluciones referidas denegatorias del reintegro de gastos médicos tras la operación realizada por el Dr. R. en la Clínica privada *Quirón* de Zaragoza, resultan discriminatorias, en relación con el tratamiento dispensado ante idéntica situación a otra paciente, la Sra. S.F..

Para entender vulnerado el principio de igualdad en aplicación de la Ley (artículo 14 CE), el Tribunal Constitucional (STC 156/06) ha venido a exigir dos elementos esenciales: el termino de comparación sustancialmente igual y la alteridad.

-Por un lado y, en primer lugar, hemos de examinar la aportación de un *tertium comparationis* con el que pueda realizarse el juicio de igualdad entre la situación de hecho

invocada por el agraviado y las precedentes resoluciones del mismo órgano que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria.

-Por otro lado, se exige, por tanto, que los supuestos de hecho sean sustancialmente iguales para que la parte pueda reclamar la misma solución ofrecida a otros. Además, se requiere la existencia de *alteridad*, la referencia a otro, puesto que el alegato de discriminación excluye la comparación consigo mismo (STC 51/05).

A pesar de que, en una primera aproximación, parece tratarse del mismo supuesto, existe un matiz esencial que hace que el término de comparación no resulte idéntico y que, por lo tanto, no se esté dispensando en la Sra. C. un tratamiento discriminatorio, en relación con el alter, esto es, lo ocurrido a la Sra. S..

El matiz esencial estriba en la existencia, por un lado, de autorización administrativa y, por otro, en la práctica de la intervención quirúrgica con los medios sanitarios públicos, pues, si bien la operación fue realizada por el especialista alemán, el Dr. R., se hizo en el Hospital Clínico Universitario; factores éstos que no concurren en el caso analizado, pues la Sra. C., aunque su esposo solicitó que se realizase la intervención con cargo al INSALUD, no esperó la necesaria autorización administrativa y decidió libre y voluntariamente, acudir a los medios privados, practicándose la operación en la Clínica *Quirón* de Zaragoza.

Por otro lado, las diferentes fechas, 2002, 2005, y la inclusión dentro del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza de dicha técnica alemana para la operación de hernias discales, también generan un tratamiento distinto, que no por ello resulta discriminatorio. Todo ello abonado con el principio de seguridad jurídica impuesto como límite a las potestades revisoras de la Administración *ex* artículo 106 de la Ley 30/1992, nos encamina a pronunciarnos sobre la inexistencia de una causa de nulidad de pleno Derecho, en concreto, la invocada por la interesada acogiéndose al artículo 62.1, a) de la Ley 30/1992.

Cuarto

Sobre los aspectos formales del expediente.

Se indica en la propuesta de resolución una posible caducidad del expediente, pese a que quedan contemplados motivos de suspensión del mismo.

El expediente se inició a petición de la interesada, cuya solicitud tuvo entrada en el Registro General de la Delegación del Gobierno en La Rioja el 7 de julio de 2006; por comunicación interna de fecha de 24 de julio de 2006, el Instructor interesó que se remitiera el historial clínico de D^a. Raquel S.F., y, el 7 de noviembre, se dicta la propuesta de resolución

desfavorable, recabando el informe de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo.

El expediente adolece de la comunicación requerida legalmente por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, esencial a los efectos de tener conocimiento por la interesada de la fecha de ingreso de su petición por el órgano competente, y por consiguiente, para el cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento.

El plazo máximo de duración de los expedientes de revisión de oficio lo concreta el artículo 102.5 de la Ley 30/1992 en tres meses; pero se distinguen los distintos efectos que el transcurso del mismo produce, dependiendo si la acción de nulidad ha sido ejercitada por la propia potestad de la Administración, esto es, de oficio; o si, por el contrario, se ha instado por el interesado frente a un acto firme, como ocurre en el caso que informamos.

Con ello queremos decir que, pasados sobradamente los tres meses preceptuados, el efecto del silencio no es, como se indica en la propuesta de resolución, la caducidad, sino que *"Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo"*, en los términos empleados en el artículo 102. 5 *in fine* de la Ley 30/1992; quedando expedita la eventual revisión jurisdiccional de un acto presunto.

CONCLUSIONES

Primera

Procede la continuación y resolución de este expediente, en el que se ejercita una acción de nulidad frente a un acto firme y consentido por no haber recurrido la Resolución de 6 de septiembre de 2002 ante la Jurisdicción Social, por el cauce del artículo 102 de la Ley 30/1992.

Segunda

Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución, pues no concurre un vicio de nulidad de pleno Derecho del artículo 62.1, letra a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Este es el dictamen que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.